



**“Si no pueden,
si piensan**

EN PALACIO NACIONAL DANZARON LAS CIFRAS DEL FRACASO



que es imposible,
RENUNCIEN

Por Pedro Díaz G.

Si las palabras, la sentencia, la exigencia de Alejandro Martí se cumpliera, ¿cuántos deberían renunciar? Por las cifras que la delincuencia ha dejado en los últimos meses en el país, todos, sin duda.

Hasta ahora, no hay estado o ámbito federal en que funcionario alguno pueda decir que sí ha podido contra la delincuencia y la inseguridad.

Las cifras son frías: sólo en 2008 se tienen registrados 323 secuestros y dos mil 713 ejecuciones. Son las cifras que anteceden a las palabras de Alejandro Martí: “si no pueden, renuncien”.

Esas cifras desnudan la incompetencia. De todos los asistentes a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, ahí donde Alejandro Martí dijo: “Les pido y les exijo a todos los que están operando la depuración de las policías del país, que hagan conciencia, hagan sentir a los ciudadanos que las policías, ministerios públicos y jueces son gente de honor, y su fuerza y voluntad hagan que el corrupto se sienta desplazado. Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, renuncien”.

La voz del padre de Fernando Martí, el joven secuestrado y asesinado hace unas semanas, la escuchan en el Palacio Nacional, las más importantes fuerzas políticas del país: todos los que no han podido contra la delincuencia.

Es jueves de tensión en el Zócalo capitalino. Dentro y fuera de Palacio Nacional. El Presidente, los gobernadores, el presidente de la Suprema Corte, diputados, senadores. Todos saben que no han podido contra la inseguridad.

Y varios datos revelan el tamaño de su miedo: sus camionetas blindadas en que llegan a la reunión del Consejo de Seguridad; los cientos de elementos de seguridad; el cerco militar a Palacio Nacional.

En ese ambiente y reunidos con el presidente Felipe Calderón, los gobernadores de los estados suscriben un acuerdo de seguridad pública mientras afuera de Palacio Nacional una pequeña multitud derriba las vallas y, por unos instantes, cede el cerco policiaco. No cesan durante la tarde las consignas; e inclusive hay nuevamente jalones entre el vocero del PRD, Gerardo Fernández Noroña, y efectivos de la Policía Federal.

Luego de tres horas de reunión, se tienen los primeros resultados: la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Legalidad, adoptado por los gobernadores de los 31 estados y del jefe de Gobierno del Distrito Federal, por los encargados de seguridad y prevención del delito del gabinete federal, por los representantes del Poder Legislativo, por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y por miembros de colectivos ciudadanos de lucha contra la delincuencia.

Un acuerdo con medidas que poco presentan de nuevo. Los mismos compromisos, las mismas caras compungidas. Anuncios que recuerdan otras reuniones en años anteriores, cuando se hablaba de cruzadas contra el crimen.

Larga reunión que ha convocado a más de un centenar de vehículos de lujo en los alrededores de la Plaza de la Constitución: blanco perfecto para la protesta social, pues la gente

reunida aquí no pierde la oportunidad y lanza huevos a los vehículos en los que se transporta la clase política mexicana: desde Suburbans, Touaregs, Expeditions, Tahoes, camionetas BMWs y hasta un Nissan 350 ZX rojo, recién comprado en Texas. Son varios los que terminan bombardeados por los blanquillos, hoy convertidos en proyectiles de más de dos pesos cada uno.

Roberto Campa Cifrián, presidente del Consejo Nacional de Seguridad, con base en los planteamientos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y las organizaciones ciudadanas participantes en la cumbre de seguridad, expuso siete puntos como propuesta para combatir la inseguridad por parte de las autoridades:

- 1) Crear una política de Estado de procuración de justicia y prevención del delito.
- 2) Coordinación entre las tres órdenes de gobierno.
- 3) Que los tres poderes cumplan la parte que les corresponde en materia de seguridad.
- 4) Incluir a las organizaciones ciudadanas, empresariales y religiosas en la procuración de justicia para evaluar el trabajo de las autoridades.
- 5) El presidente del Consejo Nacional de Seguridad conminó a los medios de comunicación a sumarse al esfuerzo mediante el fomento de la cultura de la denuncia y la legalidad.
- 6) Transparencia entre las instituciones y órdenes de gobierno.
- 7) Un plan de Estado contra la inseguridad de “gran visión”, es decir a largo plazo.

Fueron, finalmente, más de 70 los compromisos firmados. Entre ellos, la depuración de las fuerzas policiales, una estrategia antisequestro, nuevos centros penitenciarios con módulos especiales para plagiarios y un sistema de ubicación en tiempo real de los teléfonos móviles usados por los secuestradores y actualizar del padrón de licencias de portación de armas de fuego, entre otros.

Nada nuevo. Otro discurso para la colección.

Y mientras el cerco policiaco instalado en los alrededores del Palacio Nacional trata de ser derribado por varios grupos de protestantes, dentro se viven momentos de rispidez. Como cuando Alejandro Martí, el padre del joven plagiado, espetó a los que permanecían sentados en la amplia mesa con forma de herradura:

“Si piensan que el listón es muy alto, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, ¡renuncien!, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno; no sigan recibiendo un sueldo sin hacer nada, que eso también es corrupción”.

Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno capitalino, pidió la palabra tras las palabras de Alejandro Martí –quien finalizaría diciendo: “Con la muerte de Fernando yo perdí un hijo, pero México ha ganado un hijo” –, y ofreció renunciar a su cargo si no logra mejorar la situación de la seguridad.

“Yo sí te acepto el reto”, dijo Ebrard al empresario. “Si no podemos o no sabemos, debemos renunciar. Debemos de cumplir los compromisos, y si no, que se proceda la revocación del mandato”.





La firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se dio durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, asumiendo así el compromiso del Estado Mexicano de luchar en contra del crimen organizado y la impunidad.

Felipe Calderón señaló: “En este documento, todos estamos llamados a tomar los acuerdos necesarios para dar respuesta al reclamo más urgente de los ciudadanos: recuperar las condiciones mínimas de seguridad que se requieren para vivir en paz. Los ciudadanos nos exigen, y con toda justicia, que las autoridades pongamos un freno definitivo a la delincuencia, en todas sus modalidades, la cual ha emprendido una ofensiva violenta contra la sociedad, en su intento por mantener impune su actividad”.

Luego, le tocó al turno al gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, cuyo estado ha estado sometido en los últimos días a una verdadera granizada de balas y amenazas.

Dijo: se deben replantear las formas en las que se está pretendiendo combatir la delincuencia. Y luego siguió con frases que hemos escuchado muchas veces. Demasiadas. Moduló la voz: “La firma de este documento permitirá a las entidades federativas aplicar mayores recursos financieros y materiales, para bajar la impunidad y reforzar a las entidades federativas con mayor incidencia criminal y mayor impacto del crimen organizado”.

Se debe realizar una evaluación constante, dijo, porque si las reuniones se realizan cada seis meses, de nada servirá. “La evaluación debe ser permanente y un ejercicio autocrítico, para reconocer así ante la sociedad lo que no se ha hecho bien y poder replantear las cosas”.

Eduardo Bours, el de Sonora, en donde el narco tampoco canta mal las rancheras, habló en nombre de los integrantes de la Conago.

“Estamos con el Presidente –dijo en un discurso con olor a zalamería– en este asunto, que nos compromete por la seguridad de todos, y sin sacarle la vuelta, cerrando filas y sin regatear compromisos. Tenemos la responsabilidad de aterrizar acciones, porque la creciente ola delictiva y la impunidad disminuyen la confianza de los ciudadanos en sus autoridades”.

Al final, todos firmaron el acuerdo, aunque Eduardo Bours admitió que “la simple firma” del documento no resuelve por sí mismo el problema de inseguridad y violencia, por lo que “los gobernadores entendemos que lo que hoy suscribimos es un medio y nunca un fin”. Bravo.

Discurso tras discurso, se repetía lo mismo.

Ernesto López Portillo, presidente fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia AC, considera que lo que hay que

hacer, más allá de firmas y buenos propósitos, es aterrizar transformaciones concretas.

Y da algunos ejemplos:

- Urge poner en marcha un sistema de evaluación de las estrategias contra la delincuencia que sea independiente del gobierno.
- Crear una división de asuntos internos que revise el desempeño de la policía.
- Mejorar la calidad de la estadística sobre inseguridad”.

Uno de los puntos que no convence al presidente del Insyde es el sistema de supervisión civil, pues “puede generar nuevos vicios y corrupción”.

“Es altamente riesgoso el esquema de Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Procuración de Justicia que promueve el gobierno del Distrito Federal como parte de sus 20 acciones para combatir la delincuencia.

“El esquema que se busca es altamente riesgoso, ya que jerarquiza a los ciudadanos, otorgándoles cierto poder

“Si piensan que es imposible, si no pueden, ¡renuncien!, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno; no sigan recibiendo un sueldo sin hacer nada, que eso también es corrupción”

a algunos. Genera derechos a través de cargos, aunque no sean oficiales, y crea un esquema de desigualdad al confiar en algunos ciudadanos más que en otros, lo cual puede resultar peligroso”.

En su opinión, la experiencia internacional señala que este tipo de consejeros terminan por llegar a acuerdos con las autoridades y se convierten en ciudadanos enlazados a redes de intereses y en ciudadanos de primera, que son favorecidos por el Estado.

Sólo el anochecer calma los ánimos. Ha sido una tarde de jalones entre manifestantes y policías, de gritos en contra del gobierno federal, de reclamos violentos, de varios kilómetros de vallas a manera de retenes; de increpar a los dueños de la política, de gritarles traidores a los policías.

Queda el cartel que mira hacia los vehículos de lujo en los que la clase política regresará esta noche a sus casas: “¿Si hubiera sido Martínez, en vez de Martí, sería lo mismo?”